

612

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

EXPEDIENTE 11001 33 35 021 2018 00070 00

Bogotá D.C.,

13 JUL 2018

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el apoderado de la señora **Gloria Liliana Pérez Gaitán** contra la **Procuraduría General de la Nación**, ingresa para el siguiente:

ASUNTO

Decidir acerca del conflicto de interés pueda existir de parte de los jueces que me antecedieron y de la suscrita frente al conocimiento de la presente demanda, que versa sobre el concurso abierto de méritos para proveer los cargos de Procuradores Judiciales I y II.

Al respecto se

CONSIDERA

De acuerdo con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, la administración de justicia descansa en dos principios básicos: “la independencia y la imparcialidad de los jueces”. La diferencia entre dichos principios reside en que mientras la independencia alude a las influencias externas - presiones o exigencias - que pueden desviar en uno u otro sentido las decisiones, la imparcialidad atañe a la magnitud de la relación del juez con las partes o con la controversia que puede afectar que la objetividad e igualdad con que se debe tratar los intereses de las partes.

El Código General del Proceso, en desarrolló el principio de imparcialidad, instituyó en su artículo 140 las causales por las cuales el juez podrá ser recusado o declararse impedido, entre ellas, se trae a colación la causal del numeral 1º, según el cual el juez deberá declararse impedido tenga “interés directo o indirecto en el proceso”.

613

Con base en dicha casual, los jueces que me precedieron en el conocimiento del presente asunto – Jueces 19 y 20 Administrativo de Bogotá – se declararon impedidos para conocer el presente negocio.

Para el efecto, el Juez Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá manifestó que invoca la causal del artículo 140, numeral 1º, del CGP con fundamento en que participó en el concurso de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación a través de la Resolución 40 de 20 de enero de 2015, y además, integra la lista de elegibles para ocupar el cargo de Procurador II Judicial correspondiente al código y grado 3PJ_EC, conformada a través de la Resolución 345 de 8 de julio de 2015. Por esta razón, el Juez Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá envió el expediente al juez que le seguía en turno, mediante auto de 20 de septiembre de 2017

La Juez Veinte (20) Administrativo de Bogotá, por su parte, expresó que no se podía pronunciar acerca del impedimento del Juez Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá, porque también estaba incurso en la causal de impedimento invocado por el Juez que la precedía en turno con base en las mismas razones, a saber: haber participado en el aludido concurso de méritos e integrar la respectiva lista de elegibles. Por ello, la Juez Veinte (20) Administrativo de Bogotá envió el expediente al juez que le seguía en turno, mediante auto de 9 de febrero de 2018.

Al llegar los anteriores impedimentos a conocimiento de la Suscrita, se estimó pertinente que obraran en el expediente todas las listas de elegibles y los actos que definieron los aspirantes y participantes del concurso público de méritos convocado mediante la Resolución 40 de 20 de enero de 2015, a fin de sustentar cualquiera que fuera el sentido de la decisión. Por tal motivo, la titular del presente Juzgado mediante auto de 27 de abril de 2018 ordenó oficiar al Jefe de la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General, quien aportó la información solicitada a través del CD que se anexó al Oficio de 17 de mayo de 2018. Ya con esta información, y la suministrada con la demanda y sus anexos, el Despacho procederá a pronunciarse sobre los comentados impedimentos.

En primer lugar, el Despacho considera que no se configura el impedimento

614

por el sólo hecho que mis antecesores integren la lista de elegibles que se conformaron al finalizar el concurso público de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 40 de 20 de enero de 2015. Al respecto, se hace el siguiente razonamiento:

Si bien es cierto, la señora Gloria Liliana Pérez Gaitán en calidad de demandante solicita que se inaplique una lista de elegibles del aludido concurso, los jueces que manifestaron el impedimento no integran la lista de elegibles que se solicita que sea inaplicada, es decir, conforman una lista de elegibles sobre la cual la accionante no manifiesta algún interés.

En efecto, la señora Gloria Liliana Pérez Gaitán pretende que se inaplique la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial I Penal, conformada a través de la Resolución 340 de 8 de julio de 2016, mientras que el Juez Diecinueve 19 Administrativo de Bogotá – Dr. Jorge Hernán Sánchez Felizzola – y la Juez Veinte (20) Administrativo de Bogotá – Dra. Janneth Pedraza García – integran la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II Administrativo, establecida a través de la Resolución 345 de 8 de julio de 2016, como se puede constatar al abrir el CD allegado por la convocante al aludido concurso.

Esto significa que los jueces que se declararon impedidos no necesitan evaluar la legalidad de la lista a la cual pertenecen, y cualquier juicio que emitan sobre la lista de elegibles del cargo de Procurador Judicial I Penal en nada afecta su ubicación dentro de la lista de Procurador Judicial II Administrativo.

De esta forma, el Despacho descarta que se configure el impedimento por razón de la lista de elegibles, y por consiguiente, se procederá a establecer si el impedimento prospera por la participación de los Jueces Diecinueve y Veinte Administrativo de Bogotá en el pluricitado concurso para el cargo de Procuradores Judiciales, análisis que también incluye a la Suscrita porque participe dentro de dicha convocatoria.

En esta dirección, el Despacho considera que el interés directo o indirecto no se puede reducir a la participación en la convocatoria realizada mediante Resolución 40 de 20 de enero de 2015, como lo manifestaron mis antecesores sino que es

615

necesario revisar en qué sentido la señora Gloria Liliana Pérez Gaitán pretende de la inaplicación de la Resolución 40 de 20 de enero de 2015, pues ello permitirá establecer si afecta a todos los participantes o sólo a un segmento de los mismos.

Al revisar el texto introductorio con tal finalidad, se observa lo siguiente:

En la Subsección denominada “B) Antecedentes” del acápite de los hechos de la demanda, en particular, en el numeral 2º, el libelista aduce que la Resolución 40 de 20 de enero de 2015 “desconoció los fundamentos constitucionales y legales exigibles para convocar el concurso abierto de méritos para proveer los cargos de Procuradores Judiciales I y II”. Bajo esta afirmación, se podría afirmar que la actora ataca en su integridad la Resolución que convocó a participar el pluricitado concurso y por consiguiente, todos los participantes como la Suscrita y los jueces que me antecedieron quedaríamos incurso en la causal de impedimento del artículo 140, numeral 1º, del CGP.

Sin embargo, más adelante, en la Subsección de los hechos alusiva a las irregularidades literal C), punto A, hecho 1, precisa que la Resolución 40 de 20 de enero de 2015 vulnera la Constitución y la ley, por razón de las irregularidades en la “construcción, parametrización o calibración, aplicación y valoración de las preguntas” de las Convocatorias 004-2015 y 011-201 que se diseñaron para los cargos de Procuradores Judicial II en Asuntos Penales.

Se desprende de esta observación, que las irregularidades en torno a las preguntas no se refieren a las Convocatorias 006-2015 y 013-2015 destinada a los Procuradores Judicial II Administrativos, que fue para el cargo que participó quien firma la presente providencia y quienes suscribieron los impedimentos en estudio, y por consiguiente, el Despacho considera que tampoco se configura el impedimento por razón de la participación para el concurso convocado mediante la Resolución 40 de 20 de enero de 2015.

A ello se suma, que los jueces que me antecedieron no sustentan el impedimento en que hicieron algún reclamo o petición ante la entidad convocante del concurso, por razón del cuestionario del concurso en general o de su convocatoria en particular, o por “la filtración de preguntas contenidas en los

616

cuestionarios aplicados en el concurso de méritos”, aspectos sobre los cuales también gira la presente controversia.

Visto que los jueces que me antecedieron, ni la suscrita, participaron en la convocatoria diseñada para los Procuradores Judicial II en Asuntos Penales, ni objetaron preguntas de su propia convocatoria, y que ellos tampoco forman parte de lista de elegibles objeto de la solicitud de inaplicación, queda desvirtuado que puedan tener un interés directo o indirecto que afecta en alguna medida el principio de imparcialidad a la hora de impartir justicia en este asunto.

No cabe duda que el grado de generalidad con que se redactó la causal del artículo 140, numeral 1º, del CGP conlleva decir que incluye toda clase interés directo o indirecto que manifiesten los jueces, y es obvio que el concurso de Procuradores Judiciales II puede suscitar toda clase de intereses en participantes y hasta en aspirantes no admitidos e incluso en ciudadanos que no se postularon a la aludida convocatoria, sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que el juzgador no puede invocar el interés en términos generales, sino que es indispensable que pueda *“acreditarse con absoluta claridad la afectación de su fuero interno, o en otras palabras, de su capacidad subjetiva para deliberar y fallar”*¹, circunstancia que no lograron demostrar los jueces que se declararon impedidos, según se ha visto en precedencia.

Suficientes resultan ser los anteriores razonamientos para declarar que no se acepta el impedimento manifestado por los jueces conocidos por autos, y por consiguiente, se ordenará devolver el expediente al juez al cual la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá le repartió originalmente el proceso para que continúe con el trámite, como lo dispone el artículo 131, numeral 1, del CPACA.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero. No se acepta el impedimento manifestado por los Jueces Diecinueve y Veinte Administrativo de Bogotá mediante autos de 20 de septiembre

¹ Auto 080A de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). En esa ocasión se resolvía precisamente una recusación dirigida contra todos los magistrados de la Corte Constitucional, por supuestamente tener interés en la decisión, lo cual comprendía el cargo de supuesto interés moral en la misma.

617

de 2017 y 9 de febrero de 2018, respectivamente, por las razones expuestas en este proveído.

Segundo. Se ordena remitir el presente expediente al Juez Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá, conforme a lo dispuesto en el artículo 131, numeral 1, del CPACA y lo observado en esta providencia. La Secretaría dejará las respectivas constancias.

Notifíquese y cúmplase



ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

gpg